

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio No. _____

Santiago de Cali, nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
REFERENCIA:	760013333009-2015-01042-00
DEMANDANTE	Libardo Arsenio Hurtado Sánchez. linamarcelacaicedo@hotmail.com
DEMANDADO	Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR TELECOM y otros.
TEMA:	Resuelve recurso de reposición contra auto de sentencia anticipada.
DECISIÓN:	Confirma.

AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN

Vista la constancia secretarial que antecede, el Despacho procede a resolver el recurso de reposición presentado por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra el Auto interlocutorio del 26 de julio 2022, por medio del cual se dispuso correr traslado para dictar sentencia anticipada, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral.

I. ANTECEDENTES DE LA DEMANDA.

La Sala decide el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada contra el auto que además de correr traslado para dictar sentencia anticipada, también resolvió excepciones previas, entre ellas, la de falta de jurisdicción y competencia.

II. RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1. El apoderado de la UGPP oportunamente interpuso recurso de reposición al auto que corrió traslado para dictar sentencia anticipada, en los siguientes términos:

*“Al proceder a contestar la demanda del proceso de referencia, la entidad propuso como excepción previa la FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA en atención a la calidad que ostentaba el señor LIBARDO ARSENIO HURTADO SÁNCHEZ, como trabajador oficial y no como empleado público, señalando como competente para conocer de la presente demanda a la jurisdicción ordinaria laboral.
El Tribunal, mediante numeral segundo del Auto de 26 de julio de 2022, declaró no probadas las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, aduciendo que, la*



naturaleza del vínculo existente entre el demandante y TELECOM y los actos jurídicos que pide que declaren nulos están sujetos al derecho administrativo, encontrándose relacionados con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que no pueden ser conocidos por la jurisdicción ordinaria.

Al respecto, es menester precisar que, de los supuestos fácticos y jurídicos que rodean el caso en concreto, se concluye que, con la admisión de la demanda y la omisión en la declaración de la falta de jurisdicción y competencia del Tribunal se vulneró el principio de juez natural, por cuanto resulta plenamente acreditado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo NO es la competente para conocer el presente asunto, en tanto se discuten derechos laborales de un TRABAJADOR OFICIAL señor LIBARDO ARSENIO HURTADO SÁNCHEZ, configurándose claramente la excepción oportunamente alegada.

(...)

En ese orden, al encontrarse acreditada la calidad de TRABAJADOR OFICIAL del señor LIBARDO ARSENIO HUERTADO, como empleado de TELECOM, se configura la excepción de falta de jurisdicción y competencia por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que el conocimiento de la demanda impetrada corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, a quien deberá remitirse el expediente.”

III. CONSIDERACIONES

3.1. Previamente y frente a la procedencia del recurso de reposición en el presente asunto, debe indicarse que al tenor del artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, “*El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso*”

En virtud de lo anterior, procede el Despacho a resolver lo pertinente, al haberse formulado en forma oportuna el recurso de reposición por la parte demandante.

Así pues, para resolver lo referente a dicho recurso de reposición, este Despacho frente a dichas excepciones reitera el pronunciamiento del H. Consejo de Estado mediante auto de 31 de julio de 2018¹, donde esta Sala había declarado probada la excepción de falta de jurisdicción, en un caso similar al aquí planteado, en el cual la alta Corporación sostuvo lo siguiente:

“20. Así las cosas, el Despacho encuentra⁴ que el demandante, al momento del retiro de la empresa, esto es, 31 de marzo de 1995, ostentaba la calidad de trabajador oficial y no de empleado público; y además, no había cumplido el requisito de edad que exigía la ley 33 de 1985² para acceder al derecho pensional, como quiera que la misma consagró la concurrencia de 2 requisitos específicos a fin de obtener el derecho a la pensión, tales como: i) el cumplimiento del tiempo de servicio que debía ser de 20 años y; ii) 55 años de edad.

21. Igualmente, para la fecha anteriormente indicada, se encontraba en vigencia el Decreto 2123 de 1992, que produjo la reestructuración de la entidad, pasando de ser un establecimiento

¹ Radicación: 7600123330002015-01072-01 (2525-2018).

² «**Artículo 1º.-** El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio...»



público a una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. Lo que conllevó a que mutara la calidad de empleado público que ostentaba el demandante a la de trabajador oficial.

22. Así las cosas, de tenerse en cuenta únicamente la calidad de servidor público que ostentaba el demandante al momento de consolidar su derecho pensional, se trataría de un tema perteneciente al derecho laboral ordinario. No obstante, no se puede pasar por alto que la mayoría del tiempo cotizado lo hizo como empleado público.

23. Al respecto, la jurisprudencia de esta Subsección, verbigracia en sentencia de 19 de enero de 2017; con ponencia de la Suscrita consejera³, se señaló que el hecho de que un empleado haya adquirido su derecho pensional como trabajador oficial, no quiere decir que el tiempo acumulado como empleado público no cuente para efectos de determinar el régimen pensional que le sea aplicable. Al respecto, se dijo en aquella ocasión:

«Pese a todo lo anterior, no puede pasar por alto la Sala el hecho que la mayor parte del tiempo de servicio del accionado lo acumuló como empleado público cuando EMCALI era establecimiento público, y en tal condición, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 para el sector territorial⁴, contaba con más de 15 años de servicio, pues ingresó a dicha entidad el 7 de marzo de 1974, cuando además tenía más de 40 años de edad⁵; circunstancias que lo hacían beneficiario del régimen de transición de tal normativa, esto es la Ley 33 de 1985.

De esta manera, la calidad de empleado público en dicho tiempo, aunado al beneficio de transición que lo cobijaba, sentaron las bases de definición de su régimen pensional, siendo aplicable la Ley 33 de 1985 atendiendo el sector al que se vinculaba.

En materia de seguridad social, existe un principio hermenéutico que gobierna la interpretación de las normas reguladoras, que en la mayoría de veces riñe con su interpretación literal. Se refiere la Sala, al principio de la inescindibilidad de la ley, bajo el cual a una situación concreta se le aplica un régimen en su integridad, lo que impide encuadrar el asunto a diversas regulaciones segregadas en distintas fuentes. También comprende, cuando una situación quedó trabada en determinado régimen por ministerio de la ley, y que, permitiéndose su sustracción, el beneficiario se mantenga en él.»

24. De forma tal que, el hecho de que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2123 de 1992⁶, el demandante dejará de ser un empleado público y pasará a ser un trabajador oficial, no es suficiente para determinar el juez competente en el asunto de marras, pues también se han de atender otros factores para establecer la jurisdicción competente en este tipo de casos.

25. Así las cosas, además la naturaleza del vínculo existente entre el demandante y TELECOM, para tomar una determinación respecto de la jurisdicción competente, el Despacho debe observar que i) los actos jurídicos cuya anulación se pide están sujetos al derecho administrativo y ii) que según la jurisprudencia constitucional citada en las consideraciones de este proveído, los casos relacionados con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, no pueden ser conocidos por la jurisdicción ordinaria.

26. En este orden de ideas, atendiendo a la argumentación expuesta en líneas precedentes, es claro que esta jurisdicción es la competente para conocer del presente

³ El proceso trata de una acción de lesividad promovida por EMCALI E.S.P. en contra del señor Roberto Tejada Parra, para que se declarara la nulidad de la resolución por la cual se le reconoció una pensión liquidada con base en unas prerrogativas convencionales. La controversia recayó, en aquella oportunidad, en que el demandado completó el tiempo de servicio previsto en la Ley 33 de 1975 como empleado público, pero que, debido a la mutación de la naturaleza de la entidad, su vinculación cambió a la de trabajador oficial. Así las cosas, la entidad consideró que no obstante el cambio de naturaleza de la entidad, el cargo del demandado se debía asimilar al de un empleado público, pues estaba inscrito en carrera administrativa y sus funciones no cambiaron. En tal virtud, consideró la entidad que no se podía beneficiar de las prerrogativas consagradas en una convención colectiva de trabajo.

⁴ 30 de junio de 1995.

⁵ Nació el 28 de junio de 1950.

⁶ 31 de diciembre de 1992



asunto, y por ello se debe revocar el auto que declaró probada la excepción de falta de jurisdicción.

27. Por último, la Suscrita Consejera manifiesta en forma expresa que de ahora en adelante, la posición del Despacho respecto de la jurisdicción competente para conocer las controversias que se susciten respecto del régimen pensional aplicable a trabajadores oficiales que acrediten tiempos de servicio como empleados públicos, será la adoptada en esta providencia. De tal forma que, para definir este tipo de conflictos, no se aplicará lo considerado en cualquier auto anterior que vaya en contravía de lo aquí establecido.”
(subraya el Despacho)

Así pues, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial descrito se tiene que el accionante cumple con los requisitos establecidos en ella, esto es, la naturaleza del vínculo existente entre el demandante y TELECOM, además los actos jurídicos que pide que declaren nulos están sujetos al derecho administrativo, así como también la jurisprudencia citada en dicha jurisprudencia, se tiene que los casos relacionados con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, no pueden ser conocidos por la jurisdicción ordinaria.

Además de lo anterior, se impone en dicha providencia que en adelante la posición del Despacho respecto de la jurisdicción competente para conocer las controversias que se susciten respecto del régimen pensional aplicable a trabajadores oficiales que acrediten tiempos de servicio como empleados públicos, será la adoptada en esta, por lo cual no es de recibo el recurso de reposición interpuesto, y será negado.

IV. DECISIÓN

Así las cosas, esta instancia NO REPONDRÁ, la providencia dictada el 26 de julio del presente año, por tanto, en razón a lo expuesto.

RESUELVE

NO REPONER el auto recurrido de fecha 26 de julio del presente año.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firma electrónica SAMAI)
OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA
Magistrado